

Santiago, quince de julio de dos mil veinticinco.

**Vistos:**

En los antecedentes RUC 2110032734, RIT 4130-2021, del Juzgado de Garantía de Valdivia, en juicio oral simplificado iniciado por querella presentada por don Jack Mosa Shmes, se dictó sentencia el veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, por la que se absolvió al querellado Jean Jano Kourou, de ser autor del delito de injurias graves realizadas por escrito y con publicidad, previsto y sancionado en los artículos 417 y 418 del Código Penal, en relación con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N°19.733.

En contra del referido fallo, la parte querellante interpuso recurso de nulidad, el que fue conocido en la audiencia pública de veintiséis de junio último, según consta en el acta que se levantó con la misma fecha.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que la querellante, como causal principal del recurso de nulidad, hizo valer aquella prevista en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, al haberse incurrido en un error de derecho en la sentencia impugnada, atendido que el tribunal aplicó incorrectamente los alcances del artículo 30 de la Ley N° 19.733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, extendiendo sus efectos más allá del marco legal.

Explica que la exceptio veritatis es aquella circunstancia que, en determinados supuestos, permite al querellado resultar absuelto de la imputación que se le ha dirigido por un delito contra el honor, siempre que logre probar la verdad de sus dichos.

Agrega que en nuestro ordenamiento jurídico penal la regla general en los delitos de injurias es que no se admita prueba de la verdad, configurándose el delito, aunque sea verdad lo que el sujeto activo atribuye a la víctima, permitiéndose, de manera excepcional, en el artículo 420 del Código Penal,



excusar al que logre probar la verdad de sus imputaciones dirigidas contra empleados públicos y sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.

A su vez, el artículo 30 de la Ley N°19.733 extiende la aplicación de la *exceptio veritatis* para aquellas imputaciones injuriosas cometidas a través de un medio de comunicación social respecto de personas distintas a las que desempeñan una función pública, pero su aplicación es excepcional, debiendo concurrir tres requisitos copulativos para su aplicación efectiva, los que consisten en que las expresiones injuriosas se hayan hecho a través de un medio de comunicación social; que se trate de un hecho de interés público; y que se trate de un hecho verdadero, debiendo probarse este último.

Indica que la entrega de información parcial para dar cuenta de la veracidad de las afirmaciones injuriosas, consideradas por el sentenciador como visos de realidad no se condice con la exigencia legal formulada por el artículo 30 de la Ley N°19.733 y constituye una errónea interpretación de esta, extendiendo el alcance de una regla excepcional.

**SEGUNDO:** Que, en subsidio, alega la causal contenida en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, por cuanto el tribunal incurrió en una errónea aplicación al haber interpretado equivocadamente los alcances del artículo 416 del Código Penal, referido a la tipicidad subjetiva en el delito de injurias.

Explica que el delito de injuria no requiere de un fin o ánimo especial en el hechor, por lo que no existe forma de injuriar culposa punible, además que el *animus injuriandi* es solo dolo propio de la injuria, que consiste en la conciencia de la aptitud ofensiva de las acciones o expresiones y de que ellas llegarían a conocimiento de terceros o del propio ofendido, según el caso (dolo directo), o la duda acerca de alguna de estas circunstancias, que sin embargo deja indiferente al hechor (dolo eventual).



Por ello, señala que, concurriendo las circunstancias mencionadas, existe el animus injuriandi, aunque no exista el propósito específico de deshonrar, sino algún otro (perjudicar, divertirse, etc.).

Precisa que en el desarrollo de la sentencia se ha aplicado erróneamente el derecho en cuanto se establece para el delito de injuria, específicamente para el dolo, elementos o requisitos que la ley no exige, atendido que el artículo 416 del Código Penal, norma que define la injuria, no establece ninguna circunstancia especial que permita concluir que el tipo penal exige un dolo especial.

Pese a ello, el tribunal de instancia ha hecho un uso errado de esta construcción doctrinal, interpretando su aparente ausencia como elemento excluyente del dolo directo del querellado, justificando con ello su veredicto absolutorio.

**TERCERO:** Que, como segunda causal subsidiaria, el querellante hace valer la causal prevista en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con la letra c) del artículo 342 del mismo Código.

Señala que existen al menos ocho actos de imputación realizados por el querellado en contra de la víctima que deben ser calificados como injurias, por lo que la aplicación de la excusa absolutoria de exceptio veritatis debe ser acreditada en cada uno de ellos, lo que no aconteció en este caso.

Explica que el fallo no se ha hecho cargo de exponer de qué manera se encuentra fundada la aplicación de la excusa legal absolutoria contemplada en el artículo 30 de la ley N°19.733, pues no identifica cada uno los actos de imputación materia del juicio oral simplificado, sino que se remite meramente a transcribir parte de la publicación de prensa en que se contienen las expresiones injuriosas, tomándolas como un conjunto.

Agrega que, el tribunal reconoce que el querellado no ha logrado acreditar la veracidad de cada uno de los actos de imputación, a pesar de la



capacidad autónoma de cada uno de ellos para producir un efecto lesivo en el honor de la víctima.

En este sentido, la sentencia no expone de qué manera ha valorado la escasa prueba presentada por la defensa para entender que se acreditó la veracidad (a lo menos subjetiva) de cada una de las afirmaciones injuriosas proferidas por el querellado.

Por otra parte, el sentenciador no se hace cargo de las inconsistencias de la prueba presentada por la defensa, en especial en aquellas secciones en que directamente se demuestra la falsedad de las afirmaciones injuriosas.

Arguye que el tribunal omite los requisitos establecidos en el artículo 297 del Código Procesal Penal, sin que contraste toda la prueba documental y testimonial ofrecida por la parte querellante, lo que permitiría corroborar o refutar la veracidad de las afirmaciones proferidas por el imputado.

**CUARTO:** Que, el querellante concluye solicitando que, por cualquiera de las causales mencionadas, se anule el juicio oral y la sentencia dictada en él, determinando el estado en que ha de quedar el procedimiento y ordene la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado que corresponda, para que éste disponga la realización de un nuevo juicio oral.

**QUINTO:** Que, de conformidad al artículo 359 del Código Procesal Penal, para acreditar las circunstancias constitutivas de las causales esgrimidas por el recurso de nulidad, la defensa incorporó prueba documental.

**SEXTO:** Que, en primer lugar, esta Corte no puede desatender los graves defectos formales que adolece el recurso de nulidad deducido, desde que las peticiones concretas planteadas en él se refieren en conjunto a las tres causales invocadas, sin que se haga distinción respecto de cada una de ellas, limitándose a señalar que se solicita la invalidación tanto del juicio como de la sentencia, sin reparar que los motivos invocados en el arbitrio no se hicieron en forma conjunta, sino que una causal se invoca de manera principal y las otras dos como subsidiarias, por lo que no se ajustan a las exigencias del artículo



360 del Código Procesal Penal y al carácter estricto y extraordinario del recurso de que se trata.

**SÉPTIMO:** Que, no obstante ser suficiente para rechazar el recurso lo señalado en el motivo que precede, cabe hacer presente que en el desarrollo de las causales que se fundan en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, se hace referencia a la suficiencia de prueba respecto a la comprobación de los hechos fundantes de la querella para acreditar el tipo penal, como también la falta de acreditación por parte del querellado de sus alegaciones, en especial lo referente a la verdad de sus aseveraciones, haciendo alusión a una serie de medios de prueba rendidos en el juicio oral, de lo que resulta evidente que tales pretensiones no dicen relación alguna con la aplicación errónea de las normas contenidas en los artículos 416, 417, 418 y 420 del Código Penal o de los artículos 29 y 30 de la Ley N°19.733, sino que más bien alude a la valoración de la prueba que el juez del grado --en uso de las facultades que privativamente le confiere el legislador-- dio a los hechos que podrían o no configurar el ilícito, y las circunstancias que eximían de responsabilidad al imputado, lo que por cierto excede de los márgenes de la causal de errónea aplicación del derecho invocada.

**OCTAVO:** Que, finalmente, en cuanto a la causal de nulidad prevista en el artículo 374 letra e) en relación con los artículos 342 letra c) y 297 inciso primero, todos del Código Procesal Penal, el recurso esgrime que el tribunal ha incurrido en un error al apreciar la prueba, puesto que se rindió medios de prueba que debieron lógicamente llevar al sentenciador a concluir que las expresiones proferidas por el imputado perseguían desacreditar, menoscabar y difamar a la querellante, sin expresar de qué manera precisa se ha incurrido en el vicio denunciado, intentando su éxito proponiendo supuestos fácticos diversos de aquellos que han sido establecidos por la magistratura de la instancia, a quien de acuerdo a la ley corresponde precisamente dicha tarea.



Ahora bien, la circunstancia de no compartir el recurrente las conclusiones del tribunal en cuanto a la fundamentación, no constituye la causal de impugnación que se denuncia, pues para ello resultaba preciso consignar una a una las deficiencias detectadas y explicar por qué se atentó contra la lógica en los términos que se denuncia. No basta con limitarse a sostener la ocurrencia de la infracción o que no cumple con la metodología de valoración que prescribe el artículo 297, sin que en la crítica se haga referencia a algún atentado específico a la lógica, que no tenga explicación en el fallo, circunstancia que impide configurar el vicio denunciado.

**NOVENO:** Que, en consecuencia, atendido los graves defectos de los que adolece el recurso, unido a que los yerros jurídicos referidos no se han configurado en la especie, resultan circunstancias que impiden configurar los vicios de nulidad denunciados.

Por estas consideraciones y de acuerdo también a lo establecido en los artículos 373 letra b), 374 letra e), 375, 376, 384 y 385 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por los abogados que representan a la parte querellante Jack Mosa Shmes, contra la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, y el juicio oral simplificado que le antecedió, en el proceso RUC N° 2110032734-9, RIT N° 4.130-2021, del Juzgado de Garantía de Valdivia, los que en consecuencia, no son nulos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del fallo a cargo de la Ministra Sra. Gajardo.

**Rol 4.722-2024.**

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros Sr. Manuel Valderrama R., Sra. María Teresa Letelier R., Sra. María Cristina Gajardo H. y los Abogados Integrantes Sr. Raúl Patricio Fuentes M. y Sr. Carlos Urquieta S. No firma el Ministro Sr. Valderrama, no obstante haber estado en la vista y en el acuerdo del fallo, por estar con feriado legal. Santiago, 15 de julio de 2025.





En Santiago, a quince de julio de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

